

RESEÑA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Por recaer sobre un tema, como es el **sometimiento a arbitraje de los conflictos surgidos en contratos de transporte con una incidencia menor a 6.000 €**, que sin duda es de interés para cuantos actúan en el mundo del transporte, pasamos a realizar a continuación una reseña de la sentencia núm. 352/2006, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2006.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia citada, ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2096/99 planteada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona contra el artículo 38.1, párrafo tercero, de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), en la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que prescribe lo siguiente:

“Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 500.000 pesetas y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado”.¹

La Audiencia de Barcelona promovió la cuestión de inconstitucionalidad por considerar que el precepto vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución²) y contradecía la reserva jurisdiccional del artículo 117.3 de la propia Constitución³, al sustituir la tutela judicial por la resolución arbitral de las controversias, al considerar que el precepto introducía una presunción legal en base a la cual del mero silencio de los contratantes se deriva la existencia de un acuerdo de sometimiento a las Juntas Arbitrales de Transporte y, por tanto, de un pacto de exclusión de la vía judicial.

¹ Con posterioridad al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, estos apartado y párrafo fueron modificados por el artículo 1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, de mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, únicamente en el sentido de que para el supuesto contemplado la cuantía de la controversia no excediera de 6.000 euros.

² Prescribe el artículo 24.1 de la Constitución que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

³ El redactado de este artículo es el siguiente: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.

Razona la sentencia del Alto Tribunal en sus Fundamentos de Derecho, que para resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada, era preciso partir de la doctrina sentada en su anterior sentencia 174/1995, de 23 de noviembre, que precisamente declaró la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 38.2 de la LOTT, que en su redacción originaria establecía lo siguiente:

“Siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 500.000 pesetas, las partes someterán al arbitraje de las Juntas cualquier conflicto que surja en relación con el cumplimiento del contrato, salvo pacto expreso en contrario”,

Indica el Alto Tribunal que “este precepto venía a establecer un arbitraje obligatorio, con el correspondiente efecto de excluir la vía judicial, salvo que las partes contratantes hagan explícita su voluntad en contrario”; planteándose más adelante la cuestión de si resultaba “conforme con la Constitución, concretamente con sus artículos 24.1 y 117.3 CE, un precepto que establece un sistema de arbitraje institucional e imperativo, en virtud del cual el acceso a la jurisdicción queda condicionado al consentimiento expreso, formalizado en un pacto, de todas y cada una de las partes implicadas en una controversia”.

Pues bien, a pesar de afirmar la sentencia que “del precepto cuestionado no puede decirse (...) que imponga un obstáculo arbitrario o caprichoso para acceder a la tutela judicial efectiva, pues responde (...) a la finalidad de fomentar el arbitraje como medio idóneo para (...) obtener una mayor agilidad a la solución de controversias de menor cuantía”, el hecho de “hacerlo de forma que no pueda eludirse más que a través de un convenio entre todos los interesados, establece un impedimento para el acceso a la tutela judicial contrario al derecho de todas las personas “a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

Sobre esta base jurídica, el Tribunal Constitucional declaró que el primer párrafo del artículo 38.2 de la LOTT resultaba contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que “La autonomía de la voluntad de las partes --de todas las partes-- constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. Por tanto, resulta contrario a la Constitución que la Ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje de la Junta, que es lo que se hace en el párrafo primero del artículo 38.2. (...) Quebranta, por tanto, la esencia misma de la tutela judicial tener que contar con el consentimiento de la parte contraria para ejercer ante un órgano judicial una pretensión frente a ella”. *(Los subrayados son nuestros)*

En base a los razonamientos anteriores, **la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 2006, que ahora se comenta**, entiende que “el legislador de la Ley 13/1996, al reformar el **párrafo tercero del artículo 38.1 de la LOTT**, --dándole la redacción nuevamente impugnada-- no hace más que seguir esta indicación que le da la Sentencia 174/1995”, ya que “la redacción del precepto aquí cuestionado permite evitar el arbitraje y acceder a la vía judicial, ejercitando pretensiones frente a la otra parte, por la mera declaración unilateral del interesado, sin necesidad de pacto y de consentimiento de la otra parte”.

Sigue sus razonamientos diciendo que **“El precepto en su nuevo texto sigue respondiendo a la plausible finalidad de fomentar el arbitraje como medio idóneo para, descargando a los órganos judiciales del trabajo que sobre ellos pesa, obtener una mayor agilidad a la solución de las controversias de menor cuantía”**; y que “nada hay que objetar, desde el punto de vista constitucional, al hecho de que la LOTT haya atenuado las formalidades exigibles para realizar el convenio arbitral hasta el punto de haber sustituido la exigencia de (un) convenio por una presunción ope legis de su existencia cuando la controversia es de escasa cuantía”.

Por lo anteriormente expuesto, concluye la Sentencia del Alto Tribunal que el precepto cuestionado -artículo 38.1, párrafo tercero, de la LOTT- no vulnera los preceptos constitucionales en base a los que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad, que por ello resulta desestimada.

Manuel M. Vicens.
Secretario General y Asesor Jurídico